



LEYDIBELL NOGUEIRA

## Candelitas por todas partes

Protestas, detenciones de alcaldes, escasez de alimentos y medicinas, y una inflación desproporcionada, continuaron siendo las constantes durante el mes de marzo

**D**urante más de 40 días el país ha vivido una serie de protestas continuadas en las principales ciudades del país. Lo que empezó como una protesta universitaria en San Cristóbal el pasado 4 de febrero, tuvo un episodio político acelerado por la diputada María Corina Machado y Leopoldo López que días después decantó nuevamente en una movilización por reivindicaciones sociales y políticas que no ha cesado. Al cierre de la pasada edición de Vida Nacional, el dirigente opositor Leopoldo López se había entregado a las autoridades venezolanas para enfrentar las acusaciones que lo responsabilizaban de hechos de violencia en el marco de las protestas. Un mes después su juicio no se ha realizado, su nombre se comenta en algunas movilizaciones y todavía quedan algunas franelas con sus consignas: *El que se cansa pierde* y *El que persevera vence*. Pero ese esfuerzo de mercadeo igual no ha evitado que se desdibuje en medio del calor de la calle.

Quienes salieron de sus casas a reclamar a las autoridades lo hacen sin liderazgos claros porque no es un año electoral, movidos por la molestia de sentirse excluidos de un sistema de gobierno que no los reconoce y que además se impone como plan y ley. También alimenta el discurso de muchas protestas los dos constantes en la Venezuela de 2014: escasez de alimentos y medicinas, además de una inseguridad que no cede ante los novedosos y reformados veintidós veces planes de seguridad del Estado. Aunque se ha acusado que las clases populares no se han sumado de manera masiva a las protestas y que la mayor parte del país se mantiene normal, la realidad es que esa normalidad se traduce en colas diarias y supervivencia en un entorno hostil. En ese caso, sumarse a unas protestas con objetivos poco claros sería atentar contra la precariedad cotidiana.

Finalmente, ante el llamado presidencial a los cuerpos de seguridad y también a otros

componentes sociales, como los colectivos, a *apagar* las candelitas que se prendan, la gente se ha mantenido en la calle a pesar de la represión o justamente en rechazo a ella.

El cierre de este periodo, escrito hacia el 20 de marzo, inicia el día con un panorama aún más sombrío para la oposición con dos concejales tachirenses detenidos; el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, también detenido por el Sebin mientras estaba en Caracas; un juicio que condenó a diez meses de cárcel al alcalde de San Diego (Carabobo), Enzo Scarno, por no evitar las barricadas en su localidad; y la petición del allanamiento de la inmunidad parlamentaria para la diputada María Corina Machado.

Hasta el momento se cuentan 32 personas fallecidas en todo el país en el contexto de las protestas, entre ellos tres funcionarios de seguridad, y más de mil 600 detenidos. Las organizaciones de apoyo y acompañamiento a las víctimas, como el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, se han enfocado en los detenidos de Caracas, y han revelado casos que califican como tortura y tratos crueles y degradantes a manos de cuerpos policiales y militares, que incluyen puñetazos, golpes con culatas, amenazas de violación, descargas eléctricas, falsas asfixias, obligatoriedad de permanecer arrodillados largos periodos, e incluso el caso de Pierluigi de Silvestre, que fue obligado a ver cómo golpeaban a sus hijos durante la detención. Para la acción nacional se ha activado el Foro Penal, una organización civil con presencia en todas las ciudades con focos de protesta, que hacen seguimiento del trato a los detenidos y las víctimas de acciones del Estado. Han substanciado cuarenta casos de tortura que se han llevado a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos para su atención. Mientras tanto, el lobby internacional del Gobierno venezolano ha sido desplegado para contra-

restar críticas en foros internacionales y lograr apoyos de países aliados o el silencio de otros en la región. Sin embargo, el 4 de marzo un grupo de relatores de la ONU se manifestó para exigir la aclaración de los hechos en Venezuela, una información que ni siquiera fue reflejada en medios oficiales. En el discurso oficial, las protestas son actos *terroristas* que constituyen un *intento de golpe de Estado suave* con participación de Álvaro Uribe desde Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en noticieros estatales donde no se permite la participación de representantes de la oposición, el tratamiento informativo para las protestas ha sido el de actos terroristas y se acusa a sus participantes de pertenecer a la *derecha fascista*.

Sin embargo, los contextos regionales han definido la movilización y composición de las acciones. No ha sido igual el conflicto en los Andes (Mérida y Táchira) que en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto o Valencia. En esas ciudades andinas se ha reportado una mayor participación de grupos irregulares que apoyan al Gobierno en acciones conjuntas con cuerpos de seguridad del Estado, como los tupamaros en Mérida. Mientras tanto, el Gobierno nacional acusa la presencia y financiamiento de paramilitares colombianos en Táchira para azuzar la conflictividad, pero no ha detenido a un solo miembro de esos componentes armados. Ante el ataque de grupos motorizados y la represión de la Guardia Nacional con ballenas, perdigones y bombas lacrimógenas, en diversas ciudades del país se levantaron barricadas que han impedido el libre tránsito, con el fin de impedir el paso de agentes extraños a las comunidades. En algunas calles se colocaron alambres que provocaron la muerte de tres personas que viajaban en moto.

Otra constante en la conflictividad de estas fechas inéditas ha sido el impedimento fre-

cuenta de que las marchas lleguen a los sitios pautados. Bajo la excusa de que podrían atacar contra oficinas públicas, el Gobierno nacional y las alcaldías como la de Caracas han negado los permisos de manifestación o sencillamente han bloqueado el paso para dejar represadas las movilizaciones, como la que se hizo el día del médico en Plaza Venezuela y que no pudo moverse de allí.

En zonas como el casco de Chacao y la Plaza Altamira, la represión con gases y perdigones se extendió durante treinta noches consecutivas, hasta que el lunes 17 de marzo fue militarizada completamente para su *limpieza* y *aseo*, según dijeron los voceros oficiales. En las revisiones del arsenal de quienes allí protestaban no consiguieron una sola arma de fuego, aunque sí cajas de antiácido estomacal (para el gas lacrimógeno), alambres, cuerdas, botellas para bombas molotov y *miguelitos* (mangueras con clavos para atravesar en las vías). La plaza fue retomada nuevamente por civiles esa misma noche y despejada para el día siguiente, cuando se mantuvieron las protestas.

En otros espacios como la Universidad Central de Venezuela, se contabilizaron más de mil envases de gases lacrimógenos utilizados en una sola tarde. Posteriormente, la noche del 19 de marzo, un grupo irregular progobierno entró a la universidad a interrumpir una asamblea estudiantil, con el saldo de ocho estudiantes heridos y varios más asaltados mientras se debatía si continuar las actividades académicas.

Sin embargo, ninguna ciudad ha tenido preponderancia en las manifestaciones porque ninguna cuenta con cobertura mediática desde canales de televisión de manera continua. La censura y autocensura ha generado un mayor uso de Internet, telefonía celular y redes sociales en el marco del conflicto, lo que ha elevado la organización social, pero también ha multi-

plicado la cantidad de información falsa, lo que obliga a reportar con mucho más cuidado los acontecimientos. Casi se ha establecido una rutina de realizar protestas, recibir el ataque de grupos irregulares pro-gobierno, luego la represión policial y militar, después la elaboración de listas de detenidos y el seguimiento en diversos centros de detención. Muy pocos logran libertad plena, la mayoría son liberados con antecedentes, en calidad de libertad condicional con régimen de presentación, y otro grupo permanece detenido. El 19 de marzo, por primera vez, fueron detenidos seis estudiantes en la autopista Prados del Este que fueron juzgados y condenados a las cárceles del Rodeo II y Rodeo III de forma *express*, sin siquiera escuchar los alegatos de los abogados defensores.

Ninguna acción represiva ha amainado las protestas, porque estas más bien han buscado formas más creativas de realizarse cotidianamente, como la puesta de cruces y altares en recuerdo a los asesinados, o a los 24 mil muertos de 2013, en playas y otros centros de esparcimiento.

Sin embargo, tampoco las acciones políticas anunciadas por el Gobierno para el "diálogo y la paz" han cuajado soluciones a la conflictividad. La oposición se ha negado a participar en las mesas debido a la represión y las agresiones, e incluso algunos participantes de las primeras jornadas, se han retirado al ver que son espacios donde se simula un diálogo pero no hay reconocimiento entre las partes. En la primera edición, transmitida en cadena y con la presencia del presidente Nicolás Maduro, tomaron la palabra el representante de Fedecámaras y también Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, pero no hubo mayor representación política de miembros de la MUD. Por su parte, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ha invitado al presidente Maduro a un espacio de debate,



EL VENEZOLANO NEWS

pero no se ha realizado. Capriles ha sido borrado de muchos medios, además de los oficiales, y ni siquiera sus llamados a protestas no violentas ven luz.

#### ECONÓMICAS

El BCV volvió a presentar tarde sus cifras, sin embargo informó que en febrero la inflación había llegado a 2,6 %, lo que acumula 5,7 % en lo que va de 2014 y un índice anual de 57,3 %.

Asimismo, decidieron excluir el índice de escasez, que el mes pasado ya había superado 25 % y que según fuentes no oficiales ya rondaría 30 %, mientras que para artículos de primera necesidad como harinas, aceite, azúcar, café, entre otros, esa escasez podría llegar a 70 %, lo que se traduciría en cada vez más colas para adquirirlas.

Ante las dificultades para conseguir alimentos, el Gobierno anunció una tarjeta electrónica de *abastecimiento seguro* que también puede ser vista como una tarjeta de racionamiento del siglo XXI ya que sirve para que las familias solo puedan adquirir productos una vez a la semana en los mercados gubernamentales. De esta manera, las autoridades esperan que se disminuirá la zozobra sobre la compra de alimentos porque sí estará garantizado su acceso semanal.

Otra cifra preocupante, fue la del desempleo del INE, que reconoció un aumento en el desempleo medido por el organismo que llegó a 9,5 %, lo que significa que desde diciembre más de 600 mil personas perdieron su trabajo. Por ejemplo, muchos de los comercios cuyos anaqueles fueron vaciados antes de las elecciones municipales no han podido reponer mercancía aún y han debido cerrar o prescindir de su personal.

Mientras tanto, aún no se han cancelado las deudas con las líneas aéreas que se elevan a 2,5 mil millones de dólares, la industria farmacéutica, de alimentos, automotriz y telecomunicaciones. Incluso con Panamá se suspendieron las relaciones políticas y económicas y quedó suspendido el pago de las deudas con empresarios en Panamá, lo que originó que el país caribeño amenazara con revelar los capitales guardados allí por miembros del Gobierno nacional. Además, Panamá cedió su derecho de palabra en el consejo de la OEA para que la diputada María Corina Machado y la madre de Geraldine Moreno, la chica que fue asesinada por perdigonazos a quemarropa en un ojo a manos de la Guardia Nacional, pudiesen hablar.